



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

DECRETO NÚMERO 078
(10 ABR 2026)

“EL CUAL RETIRA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR CUMPLIR LA EDAD DE RETIRO FORZOSO”

EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE CHÍA

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales previstas en la Ley 909 de 2004, Ley 1551 de 2012, Decreto 1083 de 2015, y demás disposiciones concordantes y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia establece que corresponde a los Alcaldes nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.

El literal d) numeral 2 del artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, establece como función del Alcalde, nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los Gerentes, Secretarios y Directores de los establecimientos Públicos, empresas Industriales y comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.

Que mediante Decreto 18 de junio de 16 de 2015 se estableció la planta de personal de la Alcaldía del nivel central de la Administración Municipal de Chía, el cual se adicionó mediante Decreto Numero 308 de 25 de junio de 2019.

Que mediante Decreto Numero 40 de 2019 estableció el Manual Básico de la Administración Municipal y adoptó la estructura Organizacional Interna de la Administración Central del Municipio de Chía.

Que la señora ANA JULIA SALAMANCA GARZÓN, identificada con cédula de ciudadanía N° 20.471.668 de Chía, fue nombrado mediante Decreto 136 del 24 de noviembre de 1994, en el cargo de AUXILIAR DE SERVICIOS, Nivel 7, Código 04, Grado 17, en la Secretaría de Gobierno, tomando posesión en el cargo el día 2 de diciembre de 1994.

Que el día 1 de enero de 1997, se posesiono en el cargo AUXILIAR DE SERVICIOS, nivel 4, código 80, grado salarial 10, por incorporación de conformidad con lo señalado en el acuerdo 28 de 1996 y el Decreto número 150 de diciembre 30 de 1996.

Que el día 1 de enero de 1999, se posesiono en el cargo AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, código 605, grado salarial 01, por incorporación al nuevo sistema de nomenclatura de conformidad con lo señalado la Ley 443 de 1998.

Que el día quince (15) de marzo de 2006, la señora ANA JULIA SALAMANCA GARZÓN, identificada con cédula de ciudadanía N° 20.471.668 de Chía, tomo posesión en el cargo AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, NIVEL ASISTENCIAL, código 470, grado salarial 11, por incorporación realizada mediante decretos 022 y 023 del día dos (02) de marzo de 2006.

Que el día primero (01) de febrero de 2011, tomo posesión la señora ANA JULIA SALAMANCA GARZÓN, identificada con cédula de ciudadanía N° 20.471.668 de Chía, en el cargo AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, NIVEL ASISTENCIAL, Código 470, grado 01, por incorporación de conformidad a lo señalado en el Decreto 03 de 2011.

Que el día dieciséis (16) de junio de 2015, tomo posesión la señora ANA JULIA SALAMANCA GARZÓN, identificada con cédula de ciudadanía N° 20.471.668 de Chía, en el cargo AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, Código 470, grado 01, por incorporación de conformidad a lo señalado en el Decreto 18 de 2015.

Que el Decreto Municipal número 308 del 25 de junio de 2019, en su artículo 1, dispuso:

"(...). Suprimir los siguientes empleos de la planta de personal de la Administración Central del Municipio de Chía.

Nº Cargos	Denominación del Cargo	Código	Grado
1	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	04
1	INSPECTOR DE POLICIA URBANO	233	07
2	COMISARIO DE FAMILIA	202	05
2	INSPECTOR DE POLICIA	303	01
2	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	470	03
20	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	470	01
3	CELADOR	477	03
34	CELADOR	477	01
65	Total		

Que el párrafo segundo del artículo primero de la norma ibidem, señaló:

"(...)

Parágrafo Segundo: Los empleos de AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, Código 470, Grado 01 y 03, así como los empleos de CELADOR, Código 477, Grados 01 y 03, conforme aparece en la Certificación de fecha 22 de Junio de 2019, anexa al presente Decreto, expedida por la Dirección de Función Pública; son considerados transitoriamente en la planta de empleos hasta su vacancia definitiva, por gozar de la protección especial establecida en el Decreto Ley 760 de 2005 y Decreto 648 de 2017.

(...)" (sic)

Que a su turno, el Decreto Municipal número 809 del 28 de noviembre de 2019, en su artículo primero, previó:

"(...) MODIFICAR parcialmente el párrafo tercero del artículo primero del Decreto 308 del 25 de junio de 2019, el cual quedará así:

"Parágrafo Tercero. Para los funcionarios que no gozan de dicha protección especial y que ocupen los cargos en los empleos antes señalados, se hará efectivo su retiro a partir del veintitrés (23) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), para lo cual se tendrán en cuenta las disposiciones legales vigentes en cada caso. (...)"

Sin perjuicio de la certificación remitida por la Dirección de Función Pública de que trata el inciso primero de este párrafo, en todo caso gozarán de la especial protección señalada en el Decreto 790 de 2002 y el Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, aquellos servidores públicos a quienes la Dirección de Función Pública les certifique que han acreditado tal condición antes de la fecha de supresión efectiva del empleo esto es el veintidós (22) de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

Que revisada la historia laboral se encontró que la señora ANA JULIA SALAMANCA GARZÓN, cumple 70 años de edad el día 26 de julio de 2026, así mismo se evidenció que de acuerdo al último reporte de semanas cotizadas al fondo de pensiones COLPENSIONES allegado por la servidora pública a fecha 20 de octubre de 2025, contaba con un total de 1773 semanas cotizadas.

Que el artículo 1 de la Ley 1821 de 2016, señala:

"Artículo 1. (Artículo corregido por el artículo 1 del Decreto 321 de 2017). La edad máxima para retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años. Una vez cumplidos, se causará el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser reintegrados bajo ninguna circunstancia." (...)

Que el numeral 6 del artículo 2.2.11.1.1 del Capítulo I del Decreto 648 de 2017, señala la edad de retiro forzoso como causal del retiro del servicio, así:

"(...) ARTÍCULO 2.2.11.1.1 Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio implica la cesación en el ejercicio de funciones públicas y se produce por: (...)

6) Edad de retiro forzoso.

(...)"

Que la misma norma anteriormente precitada en su artículo 2.2.11.1.7 establece la edad de retiro forzoso, así:

"ARTÍCULO 2.2.11.1.7 Edad de retiro forzoso. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016, la edad de setenta (70) años constituye impedimento para desempeñar cargos públicos, salvo las excepciones señaladas en el artículo 2.2.11.1.5."

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública en concepto 45391 de 2019, destacó:

"(...)En efecto, la posibilidad de retirar a un servidor público de su empleo, una vez ha alcanzado una determinada edad fijada en la ley, es un instrumento de que disponen el legislador y la administración para lograr el principio de



igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos públicos (C.P., artículos 13 y 40-7) y el derecho al trabajo de los ciudadanos que aspiran a desempeñarse como trabajadores al servicio del Estado (C.P., artículo 25)."

La misma Corporación en Sentencia T- 012 de 2009, Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil, referente al retiro del empleado que cumple la edad de retiro forzoso, preceptuó:

"Es por ello que la Corte debe precisar, tal y como se señaló, que si bien la fijación de una edad de retiro como causal de desvinculación del servicio es constitucionalmente admisible, su aplicación debe ser razonable de tal manera que, en cada caso concreto, responda a una valoración de las especiales circunstancias de los trabajadores, toda vez que ella no puede producir una vulneración de sus derechos fundamentales, máxime teniendo en cuenta que se trata de personas de la tercera edad, y que por esa causa merecen una especial protección constitucional. De otra forma, una aplicación objetiva de la medida, sin atender a las particularidades de cada situación, tendría un efecto perverso para sus destinatarios, porque podría desconocer sus garantías fundamentales de los trabajadores, en razón a que se les privaría de continuar trabajando y percibiendo un ingreso, sin que su solicitud de pensión hubiese sido decidida de fondo, avocándolos inclusive de manera eventual a una desprotección en lo relacionado con su servicio de salud.

Muestra de este propósito de protección del Estado a los trabajadores, es la expedición de normas por parte del legislador para proteger a personas que se encuentran en circunstancias similares a las del accionante en esta tutela, y garantizar sus derechos fundamentales.

Tal es el caso del parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, el cual es indicativo de la protección que el Estado brinda a los trabajadores que culminan su vida laboral. El citado precepto establece como causal de terminación, con justa causa por parte del empleador, de las relaciones laborales o legales reglamentarias, el cumplimiento de los requisitos para pensionarse. Sin embargo, su aplicación sólo es posible hasta tanto al trabajador le ha sido reconocido el derecho a la pensión y se le ha incluido en nómina para su pago. Norma que, si bien no es aplicable a este caso concreto, demuestra la intención del legislador de proteger a los trabajadores, en tanto solamente es posible aplicarla, cuando no vulnere derechos fundamentales de los trabajadores y responda a una valoración de las circunstancias particulares del caso. Al respecto la Corte indicó en la Sentencia C-1043 de 2003 (14) que "el mandato constitucional previsto en el artículo 2º de la Constitución, según el cual el Estado debe garantizar la "efectividad de los derechos", en este caso del empleado, público o privado, retirado del servicio asegurándole la "remuneración vital" que garantice su subsistencia, su dignidad humana y los derechos de los trabajadores impone el deber de dictar una sentencia aditiva, esto es que agregue un supuesto de hecho o requisito a los señalados por el legislador con el fin de hacer compatible la norma con la Constitución Política. En este caso es necesario adicionar a la notificación de la pensión la notificación de su inclusión en las nóminas de pensionados correspondiente." (...)

La Corte Constitucional en Sentencia T-887 de 2010, Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa, ha señalado lo siguiente:

"4. La edad de retiro forzoso como causal de desvinculación del servicio

El artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, modificado por el artículo 14 de la Ley 490 de 1998, (12) contempla la posibilidad de que un servidor público sea

retirado del servicio cuando cumple la edad de retiro forzoso, es decir, 65 años. En principio, por disposición del artículo 1° del mismo Decreto, el campo de aplicación de la norma estaba circunscrita a los funcionarios que prestan sus servicios en la Rama Ejecutiva del Poder Público, sin embargo, el artículo 2 de la Ley 27 de 1992 amplió la cobertura de la norma a los empleados del Estado que prestan sus servicio a las entidades u organismos de los niveles Nacional, Departamental, Distrital, diferentes al Distrito Capital, (13) Municipal y sus entes descentralizados; así como a aquellos que prestan sus servicios en las Asambleas Departamentales, en los Concejos Municipales y Distritales y en las Juntas Administradoras Locales, excepto las Unidades de Apoyo que requieran los diputados y Concejales.

Al respecto, esta Corporación, al analizar la Constitucionalidad del artículo 31 del Decreto 2400(14), señaló que fijar una edad de retiro forzoso no desconoce la Constitución (i) porque el legislador tiene la facultad de determinar las condiciones de acceso al trabajo; (ii) porque es un mecanismo razonable de eficiencia y renovación de los cargos públicos; (iii) porque no es una medida discriminatoria, puesto que se deben brindar oportunidades laborales a otras personas que tienen derecho a relevar a quienes han cumplido cierta etapa; y finalmente, (iv) porque no se vulneran los derechos fundamentales de quien se retira, especialmente su derecho fundamental al mínimo vital, puesto que su desvinculación se ve compensada con el derecho que adquiere a disfrutar de la pensión de vejez, (15) siempre y cuando, haya cumplido los requisitos legales para acceder a ella, de acuerdo a lo establecido en el régimen de prestaciones sociales que le sea aplicable. (16)

(...)

De conformidad con las normas y jurisprudencias anteriormente citadas, esta Dirección considera que aquel servidor público que ha cumplido la edad de 65 años cuando entro en vigencia la Ley 1821 de 2016, se encuentra inhabilitado para seguir trabajando en una entidad pública o vincularse como servidor público, excepto los casos permitidos por la Ley.

En cuanto al retiro de los servidores públicos que cumplieron la edad de retiro forzoso y les falta un tiempo considerable para llenar el requisito de las semanas cotizadas exigidas para tener el derecho a la pensión de vejez y declaren su imposibilidad de seguir cotizando, deberán ser retirados del servicio y tendrán derecho al beneficio de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, en los términos del artículo 37 de la Ley 100 de 1993.

Para aquellos servidores que cumplieron la edad de retiro forzoso y les falta un tiempo "relativamente corto" para cumplir el requisito de las semanas exigidas en la ley para tener derecho a la pensión de jubilación, o los que están adelantando los trámites para que se les incluya en nómina de pensionados, la Administración "podrá" permitirles continuar laborando, por cuanto a éstas personas se les dificulta emplearse a su edad en otras entidades públicas o privadas, lo cual les impediría seguir cotizando y percibir ingresos durante este tiempo.

Que la servidora pública ANA JULIA SALAMANCA GARZÓN, identificada con cédula de ciudadanía N° 20.471.668 de Chía, se encuentra incurso en la causal de edad de retiro forzoso.

Que teniendo en cuenta que lo único que hace falta para que la servidora pública sea incluida en nómina de pensionados es la expedición del acto,



administrativo mediante la cual se fije la fecha a partir de la cual será retirada del servicio activo, se procede a expedir el presente acto administrativo.

Que teniendo en cuenta las normas citadas, es procedente retirar del servicio a la señora ANA JULIA SALAMANCA GARZÓN, identificada con cédula de ciudadanía N° 20.471.668, por la causal de edad de retiro forzoso, el cual se hará efectivo a partir del primero (1) de agosto de 2026.

Que, en mérito de lo expuesto, el señor Alcalde Municipal de Chía – Cundinamarca.

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO. RETIRAR. Del servicio a la servidora pública **ANA JULIA SALAMANCA GARZÓN**, identificada con cédula de ciudadanía N° 20.471.668 de Chía, quien desempeña el empleo de AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, Código 470, grado 01, perteneciente a la SECRETARIA GENERAL – DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, de la Planta Global de la Administración – Nivel Central del Municipio de Chía, a partir del primero (01) de agosto de 2026.

ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR. Personalmente el contenido del presente Decreto a la servidora pública **ANA JULIA SALAMANCA GARZÓN**.

ARTÍCULO TERCERO. RECURSOS. Contra el presente Decreto procede el recurso de reposición que deberá ser interpuesto ante el nominador dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación, en los términos de los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO. COMUNICAR. A la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) del presente acto administrativo para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO. VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de su fecha de expedición.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE

Dado en el Despacho del señor Alcalde Municipal de Chía a los **10 ABR 2026**



LEONARDO DONOSO RUIZ

Alcalde Municipal de Chía

Revisó y Aprobó: Fausto Alejandro Amaya Castro – Secretaria de Despacho - Secretaria General
Revisó: María Alejandra Navarrete Artunduaga – Directora Técnica (c) – Dirección de Función Pública- Secretaria General
Proyectó: NMGA– Profesional Especializado (e) – Dirección de Función Pública-Secretaría General